

la sentencia en su segunda y tercera parte, declarándose que no hay mérito para continuar la presente causa contra Romualdo e Ildefonso Gonzalez, extrañándose la conducta del Juez de primera instancia de Mascota, C. Lic. Gerónimo Romero, por sus procedimientos en este proceso.

Devuélvanse las actuaciones al Tribunal de Circuito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; hágase saber, y archívese a su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*L. Velasquez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Enero 5 de 1873.—*Alejo Gomez Eguarte.*

## AMPARO

*Promovido ante el Juez de Distrito del Estado de Tabasco por el C. Miguel Dondé, contra los actos del Juez de 1ª instancia de la Capital de ese Estado.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal no puede decir otra cosa sobre el amparo solicitado por D. Miguel Dondé, contra la providencia del C. Juez de primera instancia á que se refiere el quejoso, sino lo que ya tiene manifestado en su pedimento anterior, por que no puede pedir que se admita ese recurso en un negocio judicial, en que la ley tiene declarado que no es admisible, y por que agravaría al Tribunal Superior de Justicia del Estado, con pretender que el Juzgado de Distrito á pretexto de amparo, le usurpase sus facultades, entrometiéndose á conocer de recursos inmediata y exclusivamente some-

tidos á él, aunque con distintos nombres, como por las leyes generales y particulares lo están los de apelacion, nulidad, responsabilidad, y demás que tienen por objeto remediar las faltas, abusos ó excesos que cometan en el ejercicio de sus funciones sus respectivos inferiores, dando lugar con esto, á que de admitirse el recurso, no solamente se tuviera por admitido contra ley expresa, como sin duda lo es la de 20 de Enero de 1869 en su artículo 89, mas tambien á que con fundamento de la fraccion 2ª de su artículo 19, el mismo Tribunal se quejase de vulnerada y restringida en esto la soberania del Estado, á la vez que la autoridad contra quien se pide el amparo se quejara tambien de violarse en ella la garantía que le otorga el artículo 14 de la Constitucion, todo lo cual se evitará á juicio del que suscribe, con que V. se sirva declarar sin lugar el amparo solicitado por D. Miguel Dondé, contra la providencia del C. Juez de primera instancia á que se contrae, por no otorgar la ley ese recurso en negocios judiciales. San Juan Bautista, 24 de Junio de 1873.—*Lic. Cordera.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Setiembre 30 de 1873.—*Gabriel Sosa*, secretario.

*Sentencia del C. Juez de Distrito*

San Juan Bautista, Setiembre 27 de 1873.—Vistas estas diligencias promovidas por el C. Miguel Dondé, en solicitud del amparo contra providencias del C. Juez de primera instancia de este partido, en que se le mandó desocupar la pieza que ocupaba en casa propiedad de Doña Ana Torres. Vistos: el recurso y aclaracion del actor; el informe con justificacion de la autoridad causante; las exposiciones fiscales; las pruebas producidas, y todo lo demás del caso.

Considerando que la última peticion hecha en comparecencia por la parte actora, no es de estimarse por su notoria improce-

dencia, por la falta de forma, y por recaer sobre punto ya resuelto.

Que la demanda de amparo se origina de un negocio evidentemente judicial, y por tanto, está comprendida en la exclusiva del artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Que según el informe oficial y justificación citada, la autoridad causante procedió en la órbita de sus atribuciones y mediante los trámites de justicia.

Que el promovente ha estado muy lejos de probar que en el acto de aquel funcionario hubo violación de garantías constitucionales, pues toda su justificación lo único que revela es que entre él y la Señora Torres existe una cuestión por intereses, que aun no ha sido debatida ante los Tribunales competentes, y esto bajo ningún concepto conduce á establecer el único y verdadero fundamento del amparo, que es la contravención á los preceptos constitucionales que garantizan los derechos del hombre y del ciudadano.

Por último, considerando improcedente lo pedido en el otro sí del escrito de 23 del corriente, el Tribunal, por tales fundamentos, falla: Primero: no ha lugar á diferir por mas tiempo el pronunciamiento de esta sentencia. Segundo: la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Miguel Dondé, contra la providencia judicial que dió motivo á su demanda. Tercero: se cumplirá desde luego con la última parte del artículo 13 de la citada ley de amparo, no obstante la dilatoria solicitada. Lo proveyó el C. Lic. Limbano Correa, Juez de Distrito del Estado, y firma conmigo su escribano que doy fé.—*L. Correa.*—Ante mí.—*Gabriel Sosa.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Setiembre 30 de 1873.—*Gabriel Sosa*, secretario.

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Noviembre 22 de 1873.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juez de Distrito del Estado de Tabasco por el C. Miguel Dondé, quejándose de que se ha violado en su persona la garantía consignada en el artículo 16 de la Constitución federal, con los procedimientos del C. Juez de 1ª instancia de San Juan Bautista, que le exige, á petición de la Señora Doña Ana Torres, la desocupación de la pieza que habita en la casa propiedad de la misma Señora.

Vistas las constancias de estos autos y la sentencia del Juez de Distrito, que negó el amparo pedido, de conformidad con el pedimento fiscal, en virtud de no haberse justificado la legalidad de la queja; pues de esas constancias aparece comprobado, que la autoridad ejecutora del acto reclamado, ha procedido en la órbita de las atribuciones propias de su encargo judicial en las diligencias que practicó en el negocio contencioso promovido por la referida Señora Torres, y que ha motivado la interposición del presente recurso; en consecuencia, tales procedimientos no constituyen una violación de la garantía á que se refiere el quejoso en el artículo constitucional que alega.

Por lo expuesto, y con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada en la ciudad de San Juan Bautista á 27 de Setiembre último, por el Juez de Distrito, declarándose: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Miguel Dondé, contra los actos del Juez de primera instancia de esa Capital.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de donde proceden, acompañándolo testimonio de esta sentencia, para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias. Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José M. Lozano.—José Arteaga.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramírez.—M. de Castañeda y Ndjera.—M. Auza.—Simon Guzman.—L. Velasquez.—M. Zavaia.—José García Ramírez.—Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 28 de 1873.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juez de Distrito del Estado de Veracruz por Apolinario Tinoco, contra los procedimientos del C. Gefe político de Córdoba.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que Apolinario Tinoco, juzgado y sentenciado por la autoridad política del Canton de Córdoba á la pena capital que le fué indultada por el Ejecutivo del Estado, y conmutada con la de diez años de trabajos forzados con retención, que deberá extinguir en la fortaleza de San Juan de Ulúa, como cómplice de su hermano José María, en el homicidio cometido en la persona de D. Francisco Guadalupe Trejo, con circunstancias agravantes, entre las cuales se encuentran las de asalto y violencia; ha solicitado amparo y protección de la Justicia federal, fundándose en que la Gefatura política que conoció de la causa, no aplicó al caso exactamente las leyes de 23 de Mayo de 1872, y relativa de 18 de Mayo de 1871 que se contraen únicamente á los plagiarios y salteadores, entendiéndose por estos últimos, los que

en los caminos ó lugares despoblados asaltan al individuo con violencia, con el objeto de robarlo, herirlo ó matarlo; y los que en gavilla atacaren en poblado, con el objeto de robar, herir ó matar á los habitantes, siendo así que el occiso no fué asaltado ni atacado con violencia, sino que fué muerto con otras circunstancias agravantes, por las cuales ha debido ser juzgado y sentenciado por las autoridades judiciales del fuero común, y por lo mismo se le ha violado una de las garantías que le otorga el artículo 14 de la Constitución federal.

Pedido el informe correspondiente á la autoridad ejecutora del acto reclamado, lo emitió con la debida justificación, acompañando la causa original como la mejor prueba de aquel; y de todo lo actuado, resulta: que el homicidio de que se trata fué cometido con asalto y violencia, puesto que tuvo lugar en despoblado y por medio de armas de fuego, saliendo los perpetradores del crimen al encuentro del ofendido, en el mismo sitio en que estaba trabajando en unión de su hijo pequeño, sin defensa de ninguna clase, por habérsele asertado el tiro sin que él lo percibiera ni sospechara, habiendo concurrido las demas circunstancias de premeditación, ventaja, y alevosía.

Es evidente que se titula salteador al que sale á los caminos á robar, herir ó matar á los pasajeros, y las leyes ya citadas han hecho extensivo ese nombre, á los que cometiesen esos delitos en lugares despoblados. Segun la definición de la palabra violencia, en el Diccionario del Sr. Erschich, "es la fuerza de que se usa contra alguno, para obligarlo á hacer lo que no quiere por medios á que no puede resistir," y por fuerza se entiende la violencia que se hace á otro sin intención de causarle algun daño en su persona ó en sus cosas, la misma que puede hacerse con armas ó sin ellas.

Ahora bien, el homicidio referido segun el sentido del mismo actor, ha sido cometido con fuerza ó con violencia, que es lo mismo, porque fué acometido el occiso con ar-

SEMANARIO JUDICIAL